

En lo principal, téngase presente; **en el otrosí**, acompaña documentos.

ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

Valentina Alejandra Durán Medina y Ana Lya Uriarte Rodríguez, abogadas, en representación de los reclamantes en Causa Rol R-236-2020, caratulada “Cruz Coke Marta Lagos y otros/Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana (Res. Ex. N°113/2020)” respetuosamente decimos:

Que venimos en hacer presente a este Ilustre Tribunal consideraciones de hecho y derecho que es indispensable que se tengan a la vista para la adecuada resolución del caso de autos, en relación al plazo de interposición de la solicitud de invalidación administrativa cuya resolución dio origen a este litigio.

El Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA” que comparece en nombre de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, “COEVA”), en su informe evacuado el 8 de mayo de 2020, argumenta que la solicitud referida en el párrafo anterior, al aplicarse la teoría de la invalidación impropia, habría sido presentada fuera de plazo, debiéndose rechazar la actual reclamación por dicha razón de forma. Dicha línea argumental y las conclusiones del SEA a ese respecto deben ser enteramente rechazadas, por las razones de hecho y derecho que se pasan a exponer:

I. Argumento del SEA

El SEA sostiene, en su primer acápite del capítulo de fundamentos de derecho de su informe, que la Reclamación interpuesta ante este Tribunal debe ser rechazada al haber sido la solicitud de invalidación presentada en sede administrativa al día 31 contado desde el inicio del cómputo del plazo, en circunstancias que el plazo sería de 30 días. Habría vencido, por ende, el plazo de la invalidación impropia (o bien, “invalidación recurso”) según señala el SEA, y no así el plazo de la invalidación propiamente tal (o bien, “invalidación facultad”).

Así las cosas, debería entonces considerarse, según el SEA, que en sede administrativa se dedujo una solicitud de invalidación propiamente tal, por lo que, no habiendo sido invalidado el acto administrativo terminal (Resolución de Calificación Ambiental N°467/2019, la “RCA”) del procedimiento de evaluación del Proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” (el “Proyecto”), es

improcedente la Reclamación del artículo 17 N°8 de la Ley de Tribunales Ambientales (“Ley 20.600”). Esta última norma, según señala el SEA tendría el sentido siguiente:

“[e]n definitiva (...) establece un recurso de reclamación general, el cual de ser utilizado por aquellos quienes fueron parte del proceso de PAC o titulares, quienes deben dar cumplimiento a todos los requisitos procedentes, dentro de ellos, haber presentado la solicitud en la instancia recursiva administrativa dentro del plazo de 30 días”.¹

Sostiene el SEA que nuestra solicitud de invalidación administrativa habría sido presentada en un término de 31 días (cómputo que no compartimos), justificándolo de la siguiente forma:

“...los reclamantes, con fecha 10 de octubre de 2019 solicitaron la invalidación de la RCA N° 467/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, la que fue publicada en la plataforma electrónica del SEA con fecha 23 de agosto de 2019. De acuerdo a lo anterior, la solicitud de invalidación fue presentada, transcurrido el plazo de 31 días contados después de su publicación, lo que implica que sólo podría tratarse de una invalidación propiamente tal, para ser admitida a trámite (no invalidación impropia que debe ser presentada dentro de 30 días desde la notificación o publicación)”.²

Ilustre Tribunal, estas afirmaciones del SEA son simplemente insostenibles y lo que es más serio, es que omiten entregar a vuestras Ilustres Señorías, en forma íntegra la información correspondiente.

En efecto, en lo sucesivo se demostrará que nuestra solicitud de invalidación fue interpuesta en tiempo y forma, e incluso dentro del plazo de 30 días hábiles desde que el supuesto término para interposición de la solicitud de invalidación u otra acción, comenzara a correr para el titular del proyecto y demás interesados.

No obstante no suscribir esta parte, la debatida y no uniforme (jurisprudencialmente hablando) teoría de la invalidación impropia que impondría, por analogía a las otras hipótesis de recursos administrativos especiales en el SEIA, un plazo que la ley no ha dispuesto, de 30 días hábiles para la interposición de la solicitud administrativa de invalidación de una RCA por parte de los interesados, dicha discusión, en los términos planteados por el SEA es irrelevante en estos autos

¹ Página 10 del informe del SEA

² Página 13 del informe del SEA (énfasis agregado)

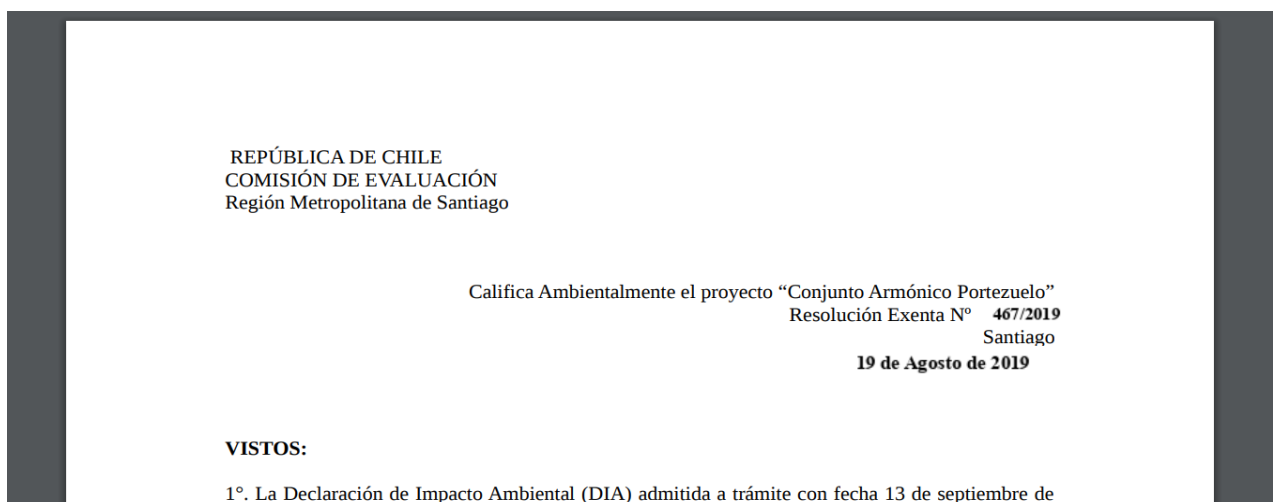
puesto que la solicitud de invalidación antedicha fue efectivamente presentada dentro de 30 días hábiles.

En consecuencia, nuestra parte, cualquiera sea la doctrina que se estime correcta en la materia, vale decir, la de invalidación del artículo 53 de la LBPA aplicable a toda hipótesis y con los plazos que se señala en dicho artículo o la de la “invalidación impropia”, de creación jurisprudencial (no uniforme ni unánime cuando se ha aplicado y que no compartimos) ha actuado dentro de plazo y se debe dar curso a la Reclamación que se ha interpuesto ante esta magistratura.

II. Sobre la RCA N°467/2019, fecha de suscripción por las autoridades competentes, registro y posterior comunicación

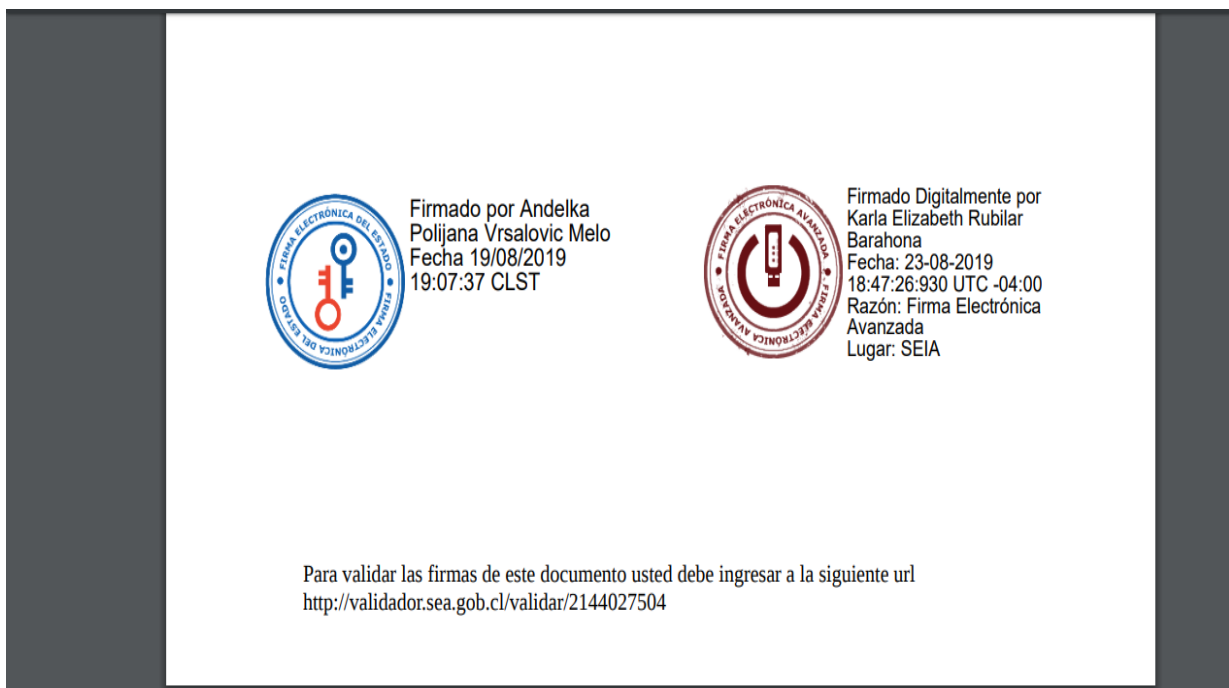
A continuación exponemos ordenadamente las actuaciones del SEA en relación a la RCA Resolución Exenta N°467/2019, su firma, registro en la ficha electrónica que conforma el expediente administrativo de evaluación en el sistema de evaluación ambiental electrónico a cargo del SEA, y su posterior comunicación:

1. La RCA favorable al proyecto que impugnamos, aparece fechada el día 19 de agosto de 2019 tal como se puede ver en la siguiente imagen, extraída del expediente administrativo electrónico del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”):



2. Sin embargo, al final del mismo documento, cuya imagen hemos extraído también del expediente administrativo electrónico del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

(“SEIA”) y que copiamos a continuación, puede apreciarse que, a la derecha de la imagen, consta la Firma Electrónica Avanzada de la entonces Intendente de la Región Metropolitana, Sra. Karla Rubilar, que se verificó el día **viernes 23 de agosto de 2019, a las 18:47:26 horas**



3. Como podemos constatar, la RCA **quedó propiamente perfeccionada el día viernes 23 de agosto a las 18:47 horas**, lo cual es refrendado por el propio texto del Oficio N° 161.455, de fecha 16 de noviembre de 2016, expedido por el Sr. Director Ejecutivo del SEA y denominado “Instructivo sobre cómputo de plazos de los Procedimientos Administrativos en el SEIA: Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental”³, (en adelante el “Oficio 161.455”), y en el que se lee en el punto 3.5.:

³ Dicho oficio se encuentra disponible al público en la sección “Instructivos para la Evaluación del Impacto Ambiental”, del Centro de Documentación de la página web del SEA, más precisamente en el enlace siguiente, visitado por última vez el 25 de mayo de 2020: https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2018/02/06/oficio_ndeg_161455_del_16-11-16_instructivo_sobre_computo_de_plazos_de_los_procedimientos_administrativos_en_el_e-seia.pdf

*Punto 3.5: “Dictación de Resoluciones. Un acto administrativo se entiende dictado en la fecha en que su tramitación se ha completado, esto es, cuando ha sido firmado por quien tiene facultades para ello con FEA o firma manuscrita, contando con su respectiva numeración y fecha. **La fecha de la firma y la que lleva escrita el documento, deben ser coincidentes.**” (el énfasis es nuestro).*

Posterior a la firma de la entonces Intendenta, se registró la RCA en la ficha electrónica de la página web del SEIA, (todo lo cual consta en esa página web), como se aprecia en la imagen que consignamos a continuación, a la que agregamos una flecha naranja para mejor visualización, el mismo día viernes 23 de agosto a las 18:48 horas:⁴

600	2018-13-91-82	Oficio pronunciamiento conforme sobre agenda	SEREMI Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	17/07/2019 13:00:58
5870	2018-13-91-83	Oficio pronunciamiento conforme sobre agenda	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región Metropolitana de Santiago	4 destinatarios	18/07/2019 07:50:34
3223	2018-13-91-84	Oficio pronunciamiento conforme sobre agenda	Consejo de Monumentos Nacionales	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	18/07/2019 12:43:49
1241	2018-13-91-85	Invitación a Reunión Comité Técnico	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	19/07/2019 14:42:35
3480	2018-13-91-86	Oficio pronunciamiento conforme sobre agenda	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana de Santiago	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	22/07/2019 12:30:39
3480	2018-13-91-87	Oficio pronunciamiento conforme sobre agenda	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana de Santiago	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	23/07/2019 09:25:18
2019	2018-13-91-88	Registro acta de Comité Técnico	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	23/07/2019 11:27:22
S/N	2018-13-91-89	Lista de Asistencia a Reunión	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	23/07/2019 11:29:59
	2018-13-91-90	Informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental (ICE)	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana		26/07/2019 14:13:10
2019	2018-13-91-93	Resolución de Calificación Ambiental (RCA)	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	20 destinatarios	23/08/2019 18:48:13
1471	2018-13-91-91	Oficio envío de RCA	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	20 destinatarios	23/08/2019 18:48:13
1472	2018-13-91-92	Carta titular RCA	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana		23/08/2019 18:48:13
	2018-13-91-94	Notificación de documento	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	22 destinatarios	26/08/2019 09:30:14
2019	2018-13-91-95	Registro de Acta Comisión de Evaluación	Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana	10 destinatarios	30/08/2019 15:09:21

- Ahora bien, según se aprecia en la misma ficha, el mismo día 23 de agosto, bajo la descripción en el sistema electrónico de “Oficio de envío de RCA”, se remite el Oficio Ord. N°1471, registrándose esta actuación en el expediente electrónico a las 18:48:13 horas del 23 de agosto (lo destacamos con una flecha gris). Es importante señalar, que este Oficio Ord. N°1471, en que se adjuntó copia de la RCA, aparece fechado el 19 de agosto de 2020, y se señala en el mismo que, ese día 19 de agosto, se envía copia de la

⁴ Link:

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2141356973

RCA, que como sabemos fue recién firmada el día 23 de agosto a las 18.47 Hrs.. Es decir, se registraba el envío de “Oficio” a 20 destinatarios comunicándoles -el día 19 de agosto- la dictación de la RCA y adjuntándoles -el mismo día 19 de agosto- una copia de la misma, **a la que le faltaba, ni más ni menos, que la firma de la principal autoridad de la Comisión de Evaluación: la ex Intendente Karla Rubilar.**

Ilustre Tribunal: esta RCA adjuntada en copia en el oficio que nos ocupa, sabemos positiva, indubitada e incuestionablemente, que no estaba perfeccionada el día 19 de agosto de 2019, pues **no estaba firmada por la Presidenta de la Comisión de Evaluación** que como ya hemos señalado, era a la sazón, la Intendente de la RM., Sra. Karla Rubilar. En otras palabras, se envía un “Oficio de envío de RCA” (el oficio N° 1471 de 19 de agosto de 2020) con una copia de RCA en que **no puede haber estado estampada** la firma de la entonces Intendente, pues esa firma sólo pudo consignarse el día 23 de agosto a las 18.47 Hrs. cuando la entonces Intendente de la RM firmó electrónicamente. Importante señalar que el día 23 de agosto a las 18.47 Hrs. lo que el SEA hace es simplemente “registrar una actuación de carácter administrativo”. Cabe deducir que la diligencia se había realizado con anterioridad y con la falencia esencial para el perfeccionamiento del acto que se pretendía comunicar -la dictación de la RCA-, cual era la firma de la RCA por la ex Intendente.

5. En la misma Ficha electrónica, se aprecia que el mismo día 23 de agosto, bajo la descripción en el sistema electrónico de “Carta titular RCA” se envía el Oficio Ord. N°1472, registrándose esta actuación en el expediente electrónico a las 18:48:13 horas (flecha negra). En este punto, nuevamente resulta importante señalar, que este Oficio Ord. N°1472, en que se adjuntó copia de la RCA a Pablo Larraín Kimber, en su carácter de representante legal de L&L, aparece fechado el 19 de agosto de 2020, y se señala en el mismo que, ese día 19 de agosto, se le envía la copia de la RCA, que como sabemos fue recién firmada el día 23 de agosto a las 18.47 Hrs.. Es decir, se registraba el envío de “Carta” al titular comunicándole -el día 19 de agosto- la dictación de la RCA y adjuntándole -el mismo día 19 de agosto- una copia de la misma, que sabemos a ciencia cierta **no estaba perfeccionada pues no estaba firmada por la Presidenta de la Comisión de Evaluación** que como ya hemos señalado, era a la sazón, la Intendente de la RM., Sra. Karla Rubilar. Es decir, se envía una carta (Oficio N° 1472) con una copia de RCA en que no constaba la firma de la entonces Intendente, **pues esa firma sólo se**

verificó el día 23 de agosto a las 18.47 Hrs. cuando la entonces Intendente de la RM firmó electrónicamente.

6. Luego, con fecha **26 de agosto de 2020**, a las 9.30 am, en la misma ficha electrónica del SEA, se consigna bajo la denominación “**Notificación de documento**”, que resaltamos con flecha celeste (en la imagen que consta más arriba), un documento que reza lo siguiente que hemos copiado textualmente del propio documento a que estamos haciendo referencia y que obra en la propia ficha electrónica:

“Santiago, 26 de agosto de 2019

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y, en virtud del artículo 162 del Decreto Supremo N°40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se le notifica el/ la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Conjunto Armónico Portezuelo", de titularidad Inmobiliaria L&L Ltda..

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Servicio de Evaluación Ambiental”

En consecuencia, si atendemos al tenor literal de lo expresado por el SEA en la “Notificación de documento” que no es otro que la RCA que nos ocupa, la fecha en que el SEA registra que se **NOTIFICA** a 22 destinatarios: al titular del proyecto y a 21 entidades adicionales es el día **26 de agosto de 2020**. Los destinatarios de esta notificación fueron: Pablo Larraín Kimber (titular), SERNAGEOMIN, Zona Central, CONAF, Región Metropolitana de Santiago, DGA, Región Metropolitana de Santiago, DOH, Región Metropolitana de Santiago, Gobierno Regional, Región Metropolitana, Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, Ilustre Municipalidad de Vitacura SAG, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI de Agricultura, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI de Bienes Nacionales, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI de Salud, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región

Metropolitana de Santiago, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago, SEREMI MOP Región Metropolitana de Santiago, Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU, RM, Consejo de Monumentos Nacionales, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Oficina de Partes.

7. Por último, el día 30 de agosto de 2019, se registra en la ficha electrónica del SEA, el **acta de la Comisión de Evaluación**, registro, que es menester señalar y destacar, deja en evidencia una situación tan extraña como improcedente. En efecto, como consta del texto del acta de la sesión de la Comisión de Evaluación, en dicha sesión, celebrada el día 5 de agosto de 2019, estuvo presente, participó y deliberó su Presidenta, es decir, la ex Intendente de la Región Metropolitana. No obstante lo anterior, se aprecia con toda claridad en la imagen que reproducimos y que hemos copiado desde el registro del sistema electrónico del SEA, que quienes firman esta acta, en forma manuscrita son: don Diego Riveaux Marcet como Presidente de la Comisión de Evaluación, condición que sólo es posible que ostente en el evento que se encuentre subrogando a la Intendente de la Región, cuestión que sabemos no es así pues en la sesión misma (5 de agosto de 2019), estuvo presente la Presidenta titular, y la fecha de registro de esta acta es el 30 de agosto de 2019, cuestión que desde luego demuestra que hubo muchos días en los cuales habría sido posible cumplir a cabalidad con la normativa relativa a suscripción de instrumentos públicos, uno de cuyos pilares es que ellos sean suscritos por quienes real y efectivamente están obligados a hacerlo en virtud de haber participado en el acto del cual dicho instrumento da cuenta.

		podríamos realizar la capacitación y contar con la asistencia de todos los Seremis.
16:05	KOV	Se levanta la sesión.
		  Diego Riveaux Marcet Presidente Comisión de Evaluación Región Metropolitana
		  Andelka Vrsalovic Melo Secretaria Comisión de Evaluación Región Metropolitana de Santiago Ministro de Fe

En consecuencia, el panorama completo de esta situación resulta tan prístino, que en verdad es incomprensible que el SEA pretenda, por la vía de generar una apariencia de realidad con una fecha no pertinente al caso, sostener que nuestra parte presentó su solicitud de invalidación a partir de una fecha que no puede empecerle por no constituir un hito que le sea aplicable.

El SEA en su sistema electrónico, consigna con toda claridad, que registra la NOTIFICACIÓN (así denomina en forma expresa la actuación) a 22 destinatarios el día 26 de agosto de 2019, y así lo registra en la ficha electrónica del SEA el día **lunes 26 de agosto a las 9.30 am.**, a la vez que el acto mismo de la notificación consta en un documento **también fechado el 26 de agosto a las 9.30 am.**, y en el texto del documento que contiene dicha notificación se expresa que ella se realiza en virtud del artículo 162 del Reglamento del SEIA, cuestión que implica que **el titular del proyecto debe entenderse notificado al día siguiente del envío**, agregando esta misma disposición que el registro de las notificaciones deberá sujetarse a lo dispuesto en el decreto supremo N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o la norma que lo reemplace. Es decir, si el registro de la notificación se efectuó el día 26 de agosto de 2019, se envió la comunicación de notificación el 26 de agosto de 2019, entonces **el titular del proyecto se entiende notificado el día 27 de agosto de 2019.**

Resulta extraño que en este momento procesal, en su informe, el SEA pretenda desconocer la materialidad y fechado de sus actuaciones, que son las siguientes:

1. El día 19 de agosto de 2019, es la fecha en que aparece fechada la RCA, Resolución Exenta N° N°467/2019, pero **SIN** firma de la Presidenta de la Comisión de Evaluación y por lo tanto no perfeccionado conforme lo dispone el citado Oficio N° 161.455, del Sr. Director Ejecutivo del SEA, punto 3.5.
2. El día 19 de agosto de 2029 se remite **Oficio Ord. N°1471** en que se adjunta copia de la RCA (el oficio aparece fechado el mismo día 19 de agosto de 2019) a 20 destinatarios. Se adjunta una RCA **SIN** firma de la Presidenta de la Comisión de Evaluación y por lo tanto no perfeccionada conforme lo dispone el citado Oficio N° 161.455, del Sr. Director Ejecutivo del SEA, punto 3.5. Este oficio Ord. N°1471 es remitido a 20 destinatarios (a la oficina de partes del SEA se le envía copia de este oficio y al titular del proyecto se le despachan dos copias del mismo oficio). Esta actuación es registrada en la ficha electrónica el viernes día 23 de agosto a las 18:48:13 Hrs.
3. El día 19 de agosto de 2019 se remite **Oficio Ord. N°1472** en que se adjunta copia de la RCA (el oficio aparece fechado el mismo día 19 de agosto de 2019). Este oficio es remitido al titular del proyecto. Esta RCA que se adjunta **SIN** firma de la Presidenta de la Comisión de Evaluación, no está perfeccionada (según reza el citado Oficio N° 161.455, del Sr. Director Ejecutivo del SEA, punto 3.5) Esta actuación es registrada en la ficha electrónica el viernes día 23 de agosto a las 18:48:13 Hrs.
4. El día viernes 23 de agosto de 2019, a las 18.47 Hrs., la Intendente de la RM, Presidenta de la Comisión de Evaluación, FIRMA la RCA Resolución Exenta N° N°467/2019.
5. El día 23 de agosto de 2019, a las 18.48:13, se registra en la ficha electrónica del SEA, la RCA, fechada el día 19 de agosto de 2019 y firmada el día 23 de agosto de 2019 a las 18:47:26 Hrs por la Presidenta de la Comisión de Evaluación.
En resumen, se registra en la ficha electrónica del SEA una RCA que incumple la obligación consignada en el citado Oficio N° 161.455, del Sr. Director Ejecutivo del SEA, punto 3.5, que, recordamos, señala que “.....La fecha de la firma y la que lleva escrita el documento, deben ser coincidentes.” (el énfasis es nuestro).
6. El día **lunes 26 de agosto de 2020, a las 9.30 Hrs.**, el SEA registra el envío de **NOTIFICACIÓN de la RCA, despachando esta notificación a 22 destinatarios,**

entre ellos, el titular del proyecto y la propia Oficina de Partes del SEA. (Llama la atención que no se comunica en este acto a la Superintendencia del Medio Ambiente a pesar de la obligación legal de hacerlo).

Por lo tanto, contrariamente a lo que argumenta el SEA, el plazo de 30 días -en la hipótesis de aplicación de la controvertida teoría de la invalidación impropia- debería contabilizarse a partir de los dos momentos siguientes: a partir del martes 27 de agosto de 2019, que es la fecha en que se entiende notificado el titular del proyecto o bien a partir del día 30 de agosto de 2019 que es el día en que el SEA registra el acta de la sesión de evaluación de la Comisión de Evaluación, documento relevante y en ocasiones pieza clave de recursos o actuaciones diversas en razón de su contenido y deliberaciones.

En consecuencia, en caso alguno nuestra parte ha efectuado su presentación después de los 30 días siguientes a las fechas posibles de contabilización del plazo para interponer la solicitud de invalidación impropia que es la tesis y plazo que pretende el SEA.

Todos estos antecedentes los exponemos para el evento, insistimos, en que se estimara del caso aplicar la teoría de la invalidación impropia, incluyendo el plazo de 30 días que se crea por los autores de dicha tesis, pese a que, como sabemos, esta teoría es controvertida, no es unánime ni de aplicación uniforme en nuestra jurisprudencia, ni compartida por las abogadas firmantes.

Reiteramos que, como se puede constatar en la ficha electrónica que hemos consignado en imagen en este escrito, la actuación **“Notificación de Documento”** cuyo texto hemos reproducido, aparece registrado con fecha **26 de agosto de 2019, cuestión que implica que el titular del proyecto se entiende notificado el día 27 de agosto de 2019 y no existe razón de texto ni doctrinaria que habilite para imponer a nuestros representados un cómputo de plazo más exigente y estricto que el aplicable al titular del proyecto.**

Por otra parte, estimamos que, de acuerdo al necesario conocimiento de todos los antecedentes necesarios para la adecuada evaluación del procedimiento y proceso de decisión de aprobación del proyecto, es necesario, respecto de aquellas personas que se encuentren en la misma posición jurídica que nuestros representados y desde luego, respecto de nuestros propios representados, considerar que la fecha a partir de la cual se deberían contabilizar los plazos para interposición

de recursos, solicitudes u otras actuaciones, es aquella en la que **puedan conocer tanto la RCA como el contenido del Acta de la sesión de Evaluación de la Comisión de Evaluación.** Esta situación -conocimiento de la RCA y del Acta de la Sesión de la COEVA- sólo se vió reflejada en el sistema electrónico del SEA el día **30 de agosto de 2019.** Es, a nuestro juicio, ésta la fecha que propiamente debiera ser aplicable a nuestra parte en caso de estimarse aplicable el plazo de la controvertida teoría de la invalidación impropia.

Es importante destacar que es el propio SEA el que sostiene estar dando cumplimiento al mandato legal del artículo 162 RSEIA (titulado “notificaciones” en el texto de esta notificación registrada el 26 de agosto). Las comunicaciones anteriores a esa fecha, como hemos dejado de manifiesto, fueron hechas el día 19 de agosto de 2019, fecha en la que la RCA aún no había sido firmada por la Presidenta de la Comisión de Evaluación, y se registraron en la ficha electrónica el día 23 de agosto de 2019, en el carácter de registros de seguimiento de las actuaciones del SEA y conformación del expediente electrónico, que es el rol que juegan los registros en la ficha electrónica del SEA, sin haber nunca subsanado el incumplimiento de la disposición contenida en el numeral 3.5 del Oficio N° 161.455, tantas veces mencionado, del propio Sr. Director Ejecutivo del SEA. El SEA, paradójicamente, aplica erróneamente el plazo de cómputo para la interposición de nuestra solicitud de invalidación, y, simultáneamente, no obstante ser el autor del instructivo, incumple las obligaciones allí contenidas, como se comprueba al contrastar la fecha del documento RCA (19 de agosto de 2019) y la fecha de su firma (23 de agosto de 2019).

III. El supuesto plazo para la solicitud de invalidación no pudo comenzar a correr antes del martes 27 de agosto de 2019

Primeramente nos parece pertinente e indispensable señalar que, según se ha visto, el SEA, en su informe, omitió señalar a este I. Tribunal una actuación esencial a los efectos que nos ocupa. En efecto, esta omisión clave es la siguiente: **el día lunes 26 de agosto a las 9.30 am, el SEA registró en su ficha electrónica del SEIA que procedió a “NOTIFICAR”,** (ese día y a esa hora) al titular del proyecto y a otros 21 destinatarios, cuestión que implica, necesariamente, que si el titular del proyecto se entiende notificado el día 27 de agosto de 2019 (aplicando el artículo 162 del RSEA) sea éste el primero de los dos posibles plazos que debe considerar para nuestros

representados (insistimos, a riesgo de ser reiterativos en exceso, para el caso en que se pretenda aplicar la teoría no consagrada legalmente, de la invalidación impropia) .

No obstante lo anterior, debemos señalar que no es sostenible que el SEA aplique, para nuestros representados, que no fueron parte del proceso de evaluación ambiental (recordemos que algunos vecinos solicitaron abrir el proceso de participación ciudadana y que el SEA les denegó esta solicitud) un estándar distinto y más exigente que el que aplica para el titular del proyecto, que se entiende notificado el día 27 de agosto de 2019.

Lo anterior, desde luego contraría normas elementales de trato equitativo y armónico entre los concernidos en cualquier procedimiento, más aún cuando nos encontramos en presencia de la aplicación de un plazo y de un procedimiento que **NO ESTÁ** regulado en la ley ni en ningún instrumento infra legal, sino que, por el contrario, corresponde a una controvertida creación jurisprudencial.

Desde la perspectiva anterior, es que entendemos que, al menos -si se adhiere a la teoría, o regla, según la denomina de manera audaz en su informe el SEA, de la invalidación impropia- nuestros representados deban ser objeto de un trato y condición igualitaria, en términos del plazo que les es aplicable, a aquel de que goza el titular del proyecto.

En efecto, pretender aplicar un plazo más restrictivo, como por ejemplo iniciando el cómputo el día viernes 23 de agosto de 2019, implica exigir a nuestros representados que hubieran permanecido atentos a la ficha electrónica del SEIA que administra el SEA, incluso un día viernes hasta las 18:47:26 Hrs, momento en el que recién se registra la RCA y continuar dicha vigilancia el fin de semana. Es decir, por este medio, el SEA construye, en su informe en esta causa, una forma de notificación enteramente desconocida por la ley y que adicionalmente resulta totalmente lesiva a los derechos de nuestra parte, además de injusta en relación a los derechos que se le otorgan al titular del proyecto al concederle un plazo mayor al efectuársele una notificación a él, en un plazo posterior a aquel que se contabiliza para vecinos no parte en el procedimiento de evaluación ambiental.

En efecto, como se vio, hacia el cierre del día viernes 23 de agosto sólo se había producido la suscripción propiamente tal de la RCA, y su registro en la ficha electrónica, hecho necesario para la conformación del expediente electrónico (reiteramos que siempre en incumplimiento del punto 3.5 del Oficio N° 161.455 del propio Sr. Director Ejecutivo del SEA, en el que se

autoimpuso la obligación de mantener coincidentes la fecha del documento con la fecha de la firma del mismo). Sin embargo, solo **a partir del martes 27 de agosto la RCA se puede entender propiamente notificada,** puesto que el propio SEA afirma, el día 26 de agosto, estar cumpliendo el artículo 162 RSEIA, esto es, la norma que indica la forma de realizar las notificaciones en esta sede.

¿Cómo podrían, I. Tribunal, un grupo de vecinos a los que se les denegó – injustamente – la etapa PAC, imponerse plenamente del contenido de la resolución antes de que se notifique a su titular y exigirseles este conocimiento?

El estándar del SEA, entonces, es contrario a toda lógica y a las normas jurídicas que deben guiar su actuar en tanto órgano de la Administración del Estado. En los hechos estaría exigiendo a los vecinos que han interpuesto la solicitud de invalidación que nos ocupa, un plazo más exigente y estricto que el plazo existente para el titular del proyecto pues se le envía la notificación el día **26 de agosto de 2019 y debe entenderse notificado el día 27 de agosto de 2019.**

Como habrá advertido este I. Tribunal, la diferencia de sólo **1 día** que pareciera estar pretendiendo aplicar el SEA, resulta más enojosa cuando se entiende que aplicar este plazo es, en los hechos, ¡querer sacar una ventaja entre un viernes casi a las 19 hrs, versus un lunes a las 9.30 am! cuando registra la notificación al titular y otros destinatarios y debe dárseles por notificados al día siguiente, y por 1 día (en la aplicación de la tesis de la invalidación impropia), negar el acceso a la justicia a nuestros vecinos representados)

Realmente llegar a pensar que se pueda denegar el acceso a la participación y a la justicia ambiental a los vecinos que representamos, en estas condiciones, bajo la aplicación de esta lógica de cómputo de plazo del SEA, imponiendo un estándar más exigente a los vecinos que al titular del proyecto y sobre la base de una supuesta “REGLA” como la de la invalidación impropia respecto de la cual no existe una norma legal sobre la forma de aplicar un plazo y que es en verdad una creación jurisprudencial controvertida, para llegar a establecer que por UN DÍA HÁBIL (diferencia entre un viernes a las 18,47:26 Hrs y un lunes a las 9.30 am) no procede que este I. Tribunal conozca el fondo de nuestra invalidación, deviene en una situación de injusticia que acrecienta el malestar que muchos ciudadanos expresan frente a un actuar desconsiderado de la Autoridad Administrativa hacia sus derechos e intereses.

En efecto, el informe del SEA señala:

“...los reclamantes, con fecha 10 de octubre de 2019 solicitaron la invalidación de la RCA N° 467/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, la que fue publicada en la plataforma electrónica del SEA con fecha 23 de agosto de 2019. De acuerdo a lo anterior, la solicitud de invalidación fue presentada, transcurrido el plazo de 31 días contados después de su publicación, lo que implica que sólo podría tratarse de una invalidación propiamente tal, para ser admitida a trámite (no invalidación impropia que debe ser presentada dentro de 30 días desde la notificación o publicación)”.⁵

El SEA, al pretender aplicar a nuestros representados un plazo más exigente que el aplicado al titular del proyecto que se entiende notificado el día 27 de agosto como ya se ha dicho, está otorgando al expediente electrónico, la ficha electrónica en que consigna las actuaciones de la evaluación ambiental, un alcance enteramente distinto y no previsto en la normativa vigente a tal instrumento, asimilándolo al Diario Oficial en cuanto a la “publicación” de actos administrativos, pretensión que escapa totalmente del espíritu y letra de la normativa vigente.

Atendidos los avances tecnológicos, y a fin de simplificar el procedimiento y de entregar total transparencia a las actuaciones públicas, se creó el “expediente electrónico”, herramienta que ha cumplido cabalmente el propósito para el cual fue diseñado. El artículo 21 del reglamento del SEIA describe esta herramienta de gestión muy claramente:

Artículo 21.- El expediente de evaluación ambiental.

La evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad dará origen a un expediente físico o electrónico, de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, que contendrá todos los documentos o piezas que guarden relación directa con la evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad.

*Los documentos o piezas antes señalados, debidamente foliados, se agregarán al expediente con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Las actuaciones y documentos que la Comisión de Evaluación, el Director Ejecutivo u otra autoridad o funcionario del Servicio remitan a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y **las notificaciones y comunicaciones** a que éstas den lugar con expresión de la fecha y hora de su envío, se agregarán en estricto orden de ocurrencia o egreso.*

⁵ Página 13 del informe del SEA (énfasis agregado)

Quedarán exceptuados de ingresar al expediente aquellos documentos o piezas que por su naturaleza no puedan agregarse, o aquellos que tengan el carácter de reservados en conformidad al artículo siguiente, los que deberán archivar en forma separada en las oficinas del Director Regional o Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda. De dicho archivo deberá quedar constancia en el expediente.

El expediente se mantendrá disponible en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental o en la oficina del Director Regional o del Director Ejecutivo del Servicio, según sea el caso, donde podrá ser consultado.” (el énfasis es nuestro)

Como se advierte de la lectura de la norma, lo previsto es que este expediente electrónico registre actuaciones y documentos que deban ser remitidos a interesados, terceros o a otros órganos públicos y que se agreguen a este expediente electrónico, en estricto orden de ocurrencia o egreso, las notificaciones y comunicaciones a que dichos documentos o actuaciones den lugar. En ningún momento se le atribuye a este expediente electrónico la calidad de instrumento de publicación, para efectos de dar comienzo al cómputo de plazo, de actuaciones o documentos. Es decir, la normativa vigente autoriza que este expediente electrónico registre, y agregue actuaciones y documentos pero no ha dispuesto que ello constituya una publicación como es la calidad que otorga a la consignación en el Diario Oficial de documentos o actuaciones, hecho que si constituye una “publicación”.

El citado Oficio N° 161.455, del Sr. Director Ejecutivo del SEA, en su numeral 3.3. individualiza cada una de las notificaciones y el cómputo de los plazos, asociado a la norma del Art. 162 del Reglamento de Evaluación Ambiental, y dictado en aplicación del artículo 51 de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado (en adelante LBPA). Se refiere así a las notificaciones electrónicas (es decir por mail), personal, por carta certificada, y notificación mediante publicación en el Diario Oficial. No se refiere en modo alguno a un tipo de notificación efectuada por el registro en el expediente electrónico de una actuación o documento.

Como advierte, no es posible desprender que con el registro de la RCA en el expediente electrónico de tramitación de la evaluación ambiental se perfeccione una publicación en términos tales que permita entender que se inicia allí un cómputo. Ello se explica por una razón muy simple: no se previó una forma de notificación ni publicación para los vecinos NO partes en el procedimiento de evaluación ambiental, para el caso de la aplicación de la tesis de la

invalidación impropia. En efecto, cuando se refiere a publicación, el Oficio 161.455 remite a la forma de notificación mediante publicación en el Diario Oficial.

Por otra parte, el mismo Oficio 161.455 consigna en el punto 3.3 último inciso, que “**se debe considerar la notificación electrónica como regla general**, a excepción de aquellos proponentes que hubiesen expresado la voluntad de excluirse del procedimiento electrónico, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Ley N° 19.300 y el artículo 20 del RSEIA” (el destacado es del documento original).

Dado lo anterior, es claro que, si resultara menester la aplicación del cómputo de plazo de la teoría de la invalidación impropia, resulta del todo evidente que éste cómputo no debe -en caso ni hipótesis alguna- resultar más gravoso y exigente que el cómputo que será aplicable al titular del proyecto.

En nuestro caso, si se quisiera buscar un plazo por analogía, ese plazo no podría ser en ningún caso anterior al de la notificación al titular acaecida el día 27 de agosto de 2019 o bien, podría aplicarse el día 30 de agosto de 2019 como de inicio del cómputo del plazo pues, en esta fecha, ya estaba notificado el titular del proyecto de la RCA y registrado en el Sistema Electrónico del SEA el Acta de la Comisión de Evaluación, pieza que funda la RCA.

En efecto, permítanos S.S.I el siguiente alcance: el cómputo del plazo a partir del día 30 de agosto de 2019 es enteramente aplicable a la luz del principio pro recurso, puesto que como se verá, el Acta de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental que aprobó el megaproyecto inmobiliario, y que es constitutiva del acto administrativo “RCA” que emana de la Comisión, y que contiene el registro de los votos y sus fundamentos, aparece registrada en el expediente en línea recién el día 30 de agosto de 2019, tres días después de la notificación de la RCA.

Este registro del Acta de Evaluación de la Comisión de Evaluación, cuyo contenido no es plasmado en la RCA, de manera posterior a la notificación de aquella, evidencia, a mayor abundamiento, una errada práctica del SEA que establece una barrera al acceso a la justicia y deja tanto a titulares como interesados y terceros, en posición de desmedro de la posibilidad de analizar la RCA en su integridad y ejercer sus derechos al recurso de manera oportuna e íntegra.

En efecto, como es el caso, bien sabe este Ilustre Tribunal, existen vicios de legalidad de una RCA que ameritan que un titular, un tercero o un interesado ejerza su derecho al recurso, que se manifiestan precisamente en el Acta de la Sesión de la Comisión de Evaluación, (en el caso que

nos ocupa, como ya se dijo, fue firmada en calidad de Presidente por quien no participó en la Sesión en dicha calidad pues la Presidenta Titular estuvo presente y deliberando el día en que esta se celebró). Es una cuestionable práctica del SEA el registrar las actas de la Sesión de la COEVA con posterioridad al registro y posterior notificación de las RCA. Es así, como las Actas, ni siquiera son notificadas, ni en este caso ni en otros, según se desprende de una simple comparación de expedientes en línea. Son conocidos los casos de RCA anuladas por vicios expresados en el acta de la sesión de las comisiones de Evaluación, como la de aquella de la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío que aprobó el proyecto “Central Termoeléctrica Pirquenes”, anulada por sentencia de la Excma. Corte Suprema de 26 de noviembre de 2012 bajo el Rol 7071-2012⁶.

Volviendo al caso que nos ocupa, es claro que nuestros representados no fueron destinatarios de comunicación alguna, ni podrían haberlo sido ya que no fueron parte del proceso PAC (que fuera solicitado por algunos vecinos e injustamente denegado). No obstante, si el SEA pretende computar un plazo para contabilizar su derecho a realizar actuaciones administrativas, impugnables luego ante este I. Tribunal, y no existiendo norma que configure la hipótesis en que nos encontramos, tenemos la certeza que, conforme incluso a principios reconocidos por instrumentos internacionales, corresponde que a nuestros representados se les aplique -y ello en forma analógica- y en el caso de adherir a la teoría de la invalidación impropia, a lo menos el plazo de notificación al titular del proyecto (27 de agosto de 2019) o aquel en que se notificó la RCA al titular y se registró el acta de la sesión de la Comisión de Evaluación (30 de agosto de 2019) y no otro plazo distinto más gravoso y exigente que el que le es aplicado al titular.

Por otra parte, es capital para la acertada comprensión de la situación en que injusta y mañosamente nos quiere poner el SEA, dado el inapropiado cómputo de plazo que pretende realizar, analizar el contenido normativo del artículo 23 del Reglamento del SEIA.

⁶ En dicha sentencia la Corte Suprema estableció que el acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que calificó favorablemente el proyecto referido, era arbitrario e ilegal en razón de que sus miembros, al pronunciarse sobre el proyecto, no expresaron adecuadamente, los motivos de su decisión, afectando así el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes de protección.

Artículo 23.- Cómputo de los plazos.

Los plazos de días establecidos en este Reglamento son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

El cómputo de plazos a que alude la norma reproducida se refiere a la totalidad de aquellos establecidos en el Reglamento, cuestión que nos reconduce a la publicación del extracto de DIA o EIA en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según corresponda; publicación del listado de DIAs en el Diario Oficial; publicación en el Diario Oficial del extracto de proyectos sometidos a Calificación de Urgencia de Estudios de Impacto Ambiental cuando el EIA se refiera a proyectos o actividades que deben ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, así como a servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país; publicación de la resolución que decreta la realización de un proceso de participación ciudadana solicitado para una DIA en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según corresponda.

Es decir, cuando el Reglamento se refiere a publicación, como forma de dar publicidad y/o activar procesos asociados a plazos, lo hace en referencia a la publicación en el Diario Oficial y un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según corresponda.

A mayor abundamiento, señalaremos que cuando ha existido la intención que un sistema electrónico o plataforma electrónica se utilice para que un registro sea entendido como un hito a partir del cual se compute un plazo, así se ha explicitado de manera expresa, no siendo una situación que pueda entenderse o hacerse extensible como de aplicación general de publicación para cómputo de plazos. En efecto, tal es el caso del artículo 19 incisos 1º y 2º de la Ley N° 20.600 que trata del Amicus Curie y que dispone que el Tribunal Ambiental deberá dar a conocer la resolución que admite a tramitación la reclamación o la demanda por daño ambiental mediante lo que denomina expresamente “publicación” de un aviso en su sitio electrónico, agregando luego que “Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de dicho aviso, cualquier

persona, natural o jurídica, que no sea parte en el proceso, que posea reconocida idoneidad técnica y profesional en la materia objeto del asunto sometido al conocimiento del Tribunal Ambiental y que invoque la protección de un interés público, podrá presentar, por escrito y con patrocinio de abogado, una opinión con sus comentarios, observaciones o sugerencias.”.

No obstante esta clara disposición, expresa, de utilizar el sitio web como lugar de “publicación” de una resolución y, a partir de ella, computar un plazo, luego, la misma Ley N° 20.600 en su artículo 22, trata de las notificaciones, tomando para dichas actuaciones, las reglas generales del Código de Procedimiento Civil. Es decir, se corrobora lo que venimos sosteniendo: la utilización de un sitio web de un órgano de la Administración sirve como lugar de registro de actuaciones administrativas para orden y transparencia de los procedimientos, pero no constituye en caso alguno un sustituto del Diario Oficial, ni tampoco es posible asimilar sus registros a “publicaciones-notificaciones” de las cuales se deriven cómputos de plazos para terceros (ni para las partes) a menos que la ley lo disponga así expresamente, como es el caso del artículo 19 inc. 1° y 2° de la Ley N° 20.600, disposición precedentemente citada.

Entonces, en el caso que nos ocupa, podemos decir, con evidencia dogmática, que las hipótesis sobre las que discurre la normativa legal, reglamentaria y aquellas orientaciones entregadas por medio de instrucciones u oficios, sólo contemplan hipótesis de notificación para: proponentes y personas naturales o jurídicas que hubieren formulado observaciones ciudadanas por medios electrónicos o escritos. En ambos casos, se contempla la notificación personal, la notificación carta certificada, la notificación electrónica entendida como el envío de la notificación a mail y la publicación en el Diario Oficial, todo lo cual es explícito y manifiesto en el punto 3.3 del Oficio N° 161.455, de 2016, del Director Ejecutivo del SEA tantas veces citado.

Véase por ejemplo la norma del artículo artículo 25 quáter de la Ley N° 19.300

“La resolución que califique favorablemente el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá ser notificada al proponente, informada a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la comunidad y a todos los organismos que hayan participado del proceso de calificación ambiental.”

El oficio N° 161.455, de 16 de noviembre de 2016, denominado “Instructivo sobre cómputo de plazos de los Procedimientos Administrativos en el SEIA: Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental”, aborda la tramitación ambiental en detalle y la forma en que cada etapa debe ir quedando registrada en el SEIA electrónico. De la lectura de este oficio se desprende en forma

clara que NUNCA se discurrió en la hipótesis que el “registro y publicación” en la ficha electrónica o expediente electrónico pudiera reemplazar a la publicidad que debe darse a los actos administrativos complejos como la RCA mediante notificación o publicación en Diario Oficial (que como sabemos no es una obligación establecida en la ley respecto de la RCA). Vale decir, ¡no existe una hipótesis de publicación-notificación!.

Por lo tanto, al no haberse previsto una forma, en el ámbito normativo, especial y expresa para dar publicidad a la RCA, resulta claro que ella no podría ser, en modo alguno, una forma más estricta y exigente en cuanto a plazo que aquella forma de que disponga el titular del proyecto puesto que ello, como hemos dicho antes, sería discriminatorio en forma negativa, es decir, perjudicial a los derechos de aquellos que no han sido parte en el proceso PAC y que advierten ilegalidades y falencias impugnables por la vía de la invalidación.

Reafirma la idea anterior la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que es normativa fundamento de la generación del expediente electrónico, que plasma expresamente un criterio hermenéutico al disponer en su artículo 8° lo siguiente:

Artículo 8°.- Las personas podrán relacionarse con los órganos del Estado, a través de técnicas y medios electrónicos con firma electrónica, siempre que se ajusten al procedimiento descrito por la ley y que tales técnicas y medios sean compatibles con los que utilicen dichos órganos.

Los órganos del Estado deberán evitar, al hacer uso de firmas electrónicas, que se restrinja injustificadamente el acceso a las prestaciones que brinden y a la publicidad y transparencia que rijan sus actuaciones y, en general, que se cause discriminaciones arbitrarias. (el destacado es nuestro)

Como se verá, nuestra invocación a un trato equitativo, equilibrado y que proteja el acceso a la justicia a nuestros representados, evitando que una actuación o interpretación normativa constituya una barrera de acceso a dicha justicia, tiene en nuestro orden nacional, y en legislación fundante de los procedimientos electrónicos, una expresa prevención: deben evitar causar discriminaciones arbitrarias.

En la especie, habiéndose presentado el proyecto mediante DIA, y habiéndose denegado un período de PAC, las posibilidades de conocer la RCA emanada de la Comisión de Evaluación,

por parte de terceros interesados (que no son operadores jurídicos) están dadas por el azar y la prensa.

Tan absurdo es el razonamiento del SEA que pretende que la RCA se entienda conocida por los terceros (nuestros representados), el día viernes 23 de agosto a las 18:48, antes mismo que el titular del proyecto, que en cambio, muestra el expediente bajo el título “notificación”, le fue enviada notificación el lunes 26 de agosto a las 09:30:14, junto a 21 destinatarios, y se entiende notificado el día 27 de agosto de 2019, y a mayor abundamiento, antes que la SMA encargada de la fiscalización de la RCA, cuya notificación a pesar de ser obligatoria conforme al artículo 61 RSEIA, no consta haberse realizado ese mismo día 26 de agosto de 2019.

Asimismo, debe considerarse en la materia el inciso segundo del artículo 162 RSEIA, que dispone lo siguiente:

En el caso de los proponentes que no hubiesen expresado voluntad de excluirse del procedimiento electrónico, así como de las personas naturales o jurídicas que hubieren formulado observaciones ciudadanas por medios electrónicos, de conformidad a lo señalado en los artículo 29 y 30 bis de la ley, serán notificadas en la dirección de correo electrónico que hubieren indicado al momento de realizar su presentación, entendiéndose notificados al día siguiente del envío. El registro de las notificaciones deberá sujetarse a lo dispuesto en el decreto supremo N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o la norma que lo reemplace.

Al disponer el propio Reglamento del SEIA que el plazo respectivo para quienes estén en una situación como aquella del titular de la especie comienza a correr el día siguiente, se reafirma que el criterio del SEA es absurdo. Conforme a lo visto, si conforme al texto reglamentario, el plazo para el titular comenzara a correr el 27 de agosto, mal podría sostenerse, sin incurrir en una grave discriminación arbitraria, que para nuestros representados – que, como se ha dicho reiteradamente, no tenían las facilidades respectivas para imponerse del contenido de la RCA – el plazo comience a correr el 23 de agosto.

Entonces, en cualquier escenario, la argumentación del SEA resulta enteramente inaceptable y, consiguientemente, la solicitud de invalidación de nuestros representados debe entenderse presentada en tiempo, cualquiera sea el plazo que se estime aplica a la invalidación ambiental.

No bastando con ello, el SEA pretende que los terceros se entiendan notificados de una RCA, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental, sin siquiera poder conocer el acto

administrativo en su integridad, puesto que el acta de la sesión de la Comisión que aprobó el megaproyecto inmobiliario, que es constitutiva del acto puesto que contiene sus fundamentos, aparece registrada en el expediente en línea, como se ha dicho, recién el día 30 de agosto a las 15:05:21 hrs.

Por ende, cabe concluir que el SEA intenta sacar ventaja de la suscripción de la RCA a una hora tardía por parte de la Intendente y Presidenta de la Comisión de Evaluación, tratando de dar a las comunicaciones de los días previos a la firma de la RCA por parte de la ex Intendente Rubilar una eficacia jurídica de la que carecen (recordamos que, de hecho el propio Oficio N° 161.455 señala que la fecha del acto administrativo -RCA en este caso-, debe ser la misma que la de la fecha en que se firma la RCA). A la vez, el SEA claramente ha incumplido su propio instructivo como demuestran las imágenes de la RCA que hemos reproducido más arriba. También yerra en derecho al otorgarle una preeminencia indebida al registro de la resolución en cuestión, por sobre la notificación, calificada como tal en forma expresa por el propio SEA. Pareciera desprenderse, a partir de la actuación del SEA, una actitud de análisis muy restrictivo para los interesados, que en definitiva cristaliza en el levantamiento de una barrera más al derecho humano de acceso a la justicia para la ciudadanía, el que sabemos es deficitario, y tan importante para el estado de derecho ambiental en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, y lo que es peor, no aplicándose a sí mismo un estándar exigente pues el expediente electrónico da cuenta de desprolijidades en su administración, a lo que se añade, la firma no pertinente del Seremi de Medio Ambiente, como Presidente de la Comisión de Evaluación en circunstancias que la Presidenta de la Comisión debió haber firmado dicha acta.

El SEA, entonces, pretende restringir el acceso ciudadano a la justicia ambiental mediante la arbitraria introducción de la “publicación-notificación” en Internet como hito que hace empezar a correr el plazo, yendo contra elementales exigencias de certeza jurídica en sede administrativa, que se materializan en que, como hemos reiterado, un acto administrativo como la RCA solo produce todos sus efectos a partir de su notificación y, para los casos en que no se ha previsto como computar un plazo para recursos o actuaciones, la hipótesis de cómputo que se aplique NO puede ser más exigente (no existiendo norma expresa como es el caso) que la fecha aplicada al titular del proyecto.

En efecto, como este I. Tribunal bien sabe, el plazo de 30 días de la invalidación impropia es una construcción jurisprudencial; no hay texto legal expreso que lo establezca. Tal doctrina es

cuestionable en la medida que, sin una base positiva clara, restringe el acceso a la jurisdicción⁷; y en enteramente inadmisibles que el SEA intente variar, a conveniencia, el momento en que dicho término empieza a correr. Hemos llegado a aceptar, al no existir norma alguna, la eventualidad de considerar que se aplique por analogía, el plazo de notificación de la RCA al titular y también que el plazo comience a correr el día 30 de agosto de 2019 (fecha en que ya se ha notificado al titular de la RCA y que se registra el acta de la Comisión de Evaluación en el sistema electrónico del SEA). Aceptar, en cambio, que el plazo aplicable a vecinos que no han sido parte en la PAC, sea uno anterior y más exigente que el aplicable al titular, es un exceso caprichoso del que no podemos participar.

Insistimos: al no existir norma legal sobre el cómputo del plazo, en ningún caso puede aplicarse a los vecinos una norma más gravosa o restrictiva que al propio titular del proyecto.

IV. Infracciones al principio pro persona y al Principio 10 de Río '92

Debemos agregar que esta argumentación que pretende levantar una nueva barrera de acceso a la participación y a la justicia ambiental, es inaceptable cuando proviene de un órgano que tiene por disposición legal, la obligación de promover la participación ciudadana, de velar por el ejercicio de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger del medio ambiente.

El principio pro persona, latamente desarrollado en nuestro escrito de Reclamación ante este I. Tribunal, rechaza que este sea el proceder de un órgano administrativo como el SEA. Como bien sabe este I. Tribunal, el artículo 4° de la LBGMA, dispone que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana. Este principio provee un criterio hermenéutico conforme al cual se debe “preferir la norma o criterio más amplio en la protección de los derechos humanos y a la

⁷ En este sentido, la autora Yeny Silva ha dicho sobre la doctrina en comentario: “Esta limitación de plazo para solicitar la invalidación del acto, realizada por la Corte Suprema y reiterada por el Tercer Tribunal Ambiental, y que sustenta gran parte de la teoría de la invalidación impropia, es a nuestro juicio forzada y carece de sustento normativo, pues si bien estamos de acuerdo con que la reclamación del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 es residual, no se ve respaldo normativo para limitar el plazo para que un administrado pueda solicitar la invalidación en sede administrativa, a un plazo de 30 días. Por lo mismo, esta interpretación no parece conveniente desde el punto de vista de la seguridad jurídica y así evitar decisiones contradictorias, o la generación de ventanas impugnatorias desproporcionadas en favor de quienes no fueron parte del proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, ello no hace desaparecer la debilidad jurídica o más bien la ausencia de fundamentos normativos que sustenten esta limitación de plazo para solicitar la invalidación del acto ante el propio órgano administrativo. SILVA BARRÍA, Yeny. *Recursos administrativos en el SELA*. Santiago, Rubicón Editores, 2019. P. 92.

norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos". Conforme a Aguilar Cavallo y Nogueira Alcalá⁸, se puede encontrar fundamento para este principio en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966, en su artículo 5°; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, artículo 5.2; y en el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en su artículo 29 literal b), instrumentos que han sido ratificados por el Estado de Chile, se encuentran vigentes, e incorporados al ordenamiento positivo conforme al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, en relación también con el artículo 1° de la Constitución, el cual establece como valor fundamental la dignidad de la persona humana, "la cual funda los derechos esenciales y determina una concepción personalista e instrumental del Estado, el cual está al servicio de las personas y del bien común".

Esto se ve complementado con el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, suscrita por Chile, que dispone que *"el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes"*⁹.

A mayor abundamiento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sostenido que *"[e]s preciso aplicar más rigurosamente la normativa ambiental, con tal de perfeccionar el proceso de realización de evaluaciones de impacto ambiental, con el fin de asegurar que se tomen seriamente en consideración proyectos alternativos, se garantice la participación ciudadana en las etapas preliminares y se otorgue más atención a los efectos ambientales potenciales, especialmente en los ecosistemas"*¹⁰.

⁸ AGUILAR CAVALLO Gonzalo y NOGUEIRA ALCALÁ Humberto, El principio favor persona en el derecho internacional y en el derecho interno como regla de interpretación y de preferencia normativa - *Revista de Derecho Público* - Vol. 84, 1° Sem. 2016, pp. 13-43

⁹ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 10. Disponible en <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>

¹⁰ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016, Santiago, 2016, p. 31.

En efecto, los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, reconocidos en el Principio 10 de Río 1992, e integrantes del principio de justicia ambiental, son **derechos humanos** encuadrados dentro de la categoría de derechos civiles y políticos y protegidos por el Derecho Internacional de los DDHH. Tienen un carácter esencial para la vida democrática y operan como catalizadores para la realización de otros derechos. Como ya mencionamos, están regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19, 25 y 2.3, y 14, respectivamente), por lo que los Estados están obligados a respetar y garantizar sus disposiciones con carácter inmediato y en condiciones de igualdad y no discriminación (artículo 2 del PIDCP).

Estos principios fueron confirmados en 2012 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río+20), ocasión en que se recalcó que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible.

Más recientemente, en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace hincapié en los conceptos de universalidad, participación e inclusión, encontrándose los derechos de acceso en el centro de la agenda y permeando todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero reconocidos específicamente en el ODS 16 que explicita el compromiso de los Estados en lo concerniente a garantizar: i) el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales; ii) la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, y iii) la igualdad de acceso a la justicia¹¹.

En el mismo sentido debe tenerse presente la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por Colombia¹², la que luego de analizar la relación entre DDHH y medio ambiente, y de establecer la relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, establece que los derechos procedimentales, como

¹¹ Véase El Informe de Políticas Públicas 13 editado por la Fundación Espacio Público, de los autores Luis Cordero, Valentina Durán, Camila Palacios, Violeta Rabi, Andrea Sanhueza y Anahí Urquiza, titulado “Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile”, de diciembre de 2017m disponible en <https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/12/2018-MAYO-IPP-Acceso-a-la-justicia-ambiental-digital-FINAL.pdf>, p. 9.

¹² Opinión consultiva disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

el acceso a la información, la participación pública o el acceso a un recurso efectivo, contribuyen a garantizar los derechos sustantivos y apoyar la implementación de las obligaciones de los Estados. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma “*esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante*” (párrafo 231), agregando más adelante en el párrafo 237 que “*En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece **que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia**, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta Opinión. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental*” (el subrayado es nuestro).

Con estas argumentaciones reñidas con sus deberes superiores, el SEA y la Comisión de Evaluación está infringiendo sus obligaciones de promoción de la participación ciudadana en pos del derecho a un ambiente sano, establecidas y reconocidas por los instrumentos de derechos humanos y compromisos de Chile, ya expuestos.

V. El SEA introduce la tesis de la invalidación impropia sólo en sede judicial sin haberla abordado previamente en sede administrativa

Por último, se debe tener en cuenta que, nunca, durante el transcurso del procedimiento administrativo de invalidación, ni al resolverse nuestra solicitud de invalidación, fue siquiera mencionado este tema del plazo que hoy se pretende aplicar.

Es a lo menos inquietante y frustrante que enfrentemos hoy una alegación que durante todo el proceso de análisis administrativo de nuestra solicitud de invalidación (y su resolución) nunca estuvo presente.

Es más, no hubo ni una sola referencia al tema del plazo de interposición de la solicitud de invalidación y sólo ahora, en sede judicial, el SEA reflexiona acerca de los plazos involucrados en el procedimiento de invalidación y realiza la distinción que surge a propósito de la tesis de la invalidación impropia. Al momento de acoger la solicitud de invalidación, la Comisión de Evaluación Ambiental señaló que la solicitud estaba interpuesta cumpliendo el artículo 53 de la Ley 19.880 lo que, obviamente induce a pensar que se estima que estamos frente a un órgano administrativo que hace suya la pertinencia jurídica de la solicitud de invalidación y su posterior reclamo ante este I. Tribunal conforme al artículo 17 N° 8 de la Ley 20.600, cuestión, por lo demás totalmente adecuada pues la Excma. Corte Suprema así lo ha estimado las más de las veces.

Estimamos que un actuar transparente de la Administración, y que al menos sitúe a los administrados en el escenario argumental en que se posiciona el SEA, debió, si era la decisión del SEA, a través de la Comisión de Evaluación, haberse expresado en la aplicación explícita de la teoría de la invalidación impropia, y haber advertido al acoger a trámite nuestra solicitud de invalidación, que dado su cómputo (que por cierto NO compartimos como ya hemos expuesto latamente), nuestra presentación era entendida como una solicitud de invalidación propiamente tal y no una invalidación impropia.

Si el SEA, al acoger a trámite nuestra solicitud de invalidación, hubiera transparentado su posición doctrinaria y análisis de cómputo de plazo para clasificar nuestra solicitud de invalidación como invalidación propiamente tal, nos habría otorgado la oportunidad de plantear nuestra argumentación en contra y exponerla a la Comisión de Evaluación que falló nuestro recurso y que, por cierto, nunca tuvo noticia de esta disputa de análisis normativo y doctrinario. Es decir, aquellos que decidieron el rechazo de esta invalidación (Intendente (S) y Seremis), no tuvieron noticia que se nos estaba aplicando un plazo y teoría que, según el SEA, nos impedía acceder a este Ilustre Tribunal.

De este modo, Ilustre Tribunal, hemos sido sometidos a la decisión de un cuerpo colegiado, es decir, la Comisión de Evaluación Ambiental, frente a la cual comparecimos presencialmente y alegamos, en la ignorancia completa respecto de este argumento de última hora, tan ilegal como arbitrario, que nos privó de elementos de defensa frente al órgano decisor: De esta forma el SEA transgrede el principio de congruencia que el SEA tanto invoca en sus escritos en sede judicial cuando le toca defenderse de las reclamaciones que son interpuestas en contra de sus

actuaciones, o al restringir el alcance de las reclamaciones PAC, como nos lo recuerdan los autores Ezio Costa y Victoria Belemmi¹³.

VI. Conclusión y petitorio

Es claro, I. Tribunal, que el supuesto plazo para realizar la solicitud de invalidación de la RCA N°467/2019, que calificó favorablemente el “Conjunto Armónico Portezuelo” no comenzó a correr el día viernes 23 de agosto de 2019, como pretende el SEA, y que bajo ningún concepto es posible estimar que éste haya comenzado a correr antes del día martes 27 de agosto de dicho año. Es más, el plazo de 30 días (para el evento que se estime pertinente aplicar la teoría de la invalidación impropia) también puede computarse desde el día 30 de agosto de 2019, fecha en que ya había sido notificado de la RCA el titular del proyecto y registrada en el sistema electrónico del SEA el acta de la sesión de la COEVA que aprobó el megaproyecto.

Así, contando el plazo de 30 días hábiles administrativos, que sería aplicable según el SEA -según la controvertida doctrina de la invalidación impropia que no compartimos-, si se cuenta desde el 27 de agosto, se llega a que **el plazo venció el día 11 de octubre de 2019**, (nuestra parte presentó el escrito con la correspondiente solicitud el día 10 de octubre de 2019) , y si se cuenta desde el día 30 de agosto de 2019, **este plazo venció el 16 de octubre de 2019**. De esta forma, aunque se pretendiera adherir a tal doctrina y plazo restrictivos, **no se presentaría problema alguno en relación al plazo de 30 días de la invalidación impropia, que es la que el SEA pretende aplicar según detalla en su informe, tesis de origen jurisprudencial que no ha sido aplicada uniforme ni mayoritariamente y que no tiene su asidero en la ley, haciéndose plenamente procedente el recurso de reclamación en conformidad al artículo 17 N°8 de la Ley 20.600**.

Dar lugar a lo contrario equivaldría a aceptar que una artificiosa e inaceptable construcción restringiera indebidamente el acceso a la justicia ambiental, transgrediendo principios fundamentales y normas de derechos humanos así como compromisos internacionales de Chile, impidiendo el acceso al recurso, amén de incurrir en violación del principio de congruencia.

¹³ Costa, E., & Belemmi, V. (2017). ¿Susurros al viento?: Desempeño de la participación ciudadana en el SEIA. Revista de Derecho Ambiental, (8), pp. 7-29. doi:10.5354/0719-4633.2017.47909, p. 24 recordando los casos referidos a los proyectos: Candelaria 2030-Continuidad operacional (RCA del año 2015), Parque Eólico Chiloé (RCA del año 2015) y Hotel Punta Piqueros (RCA del año 2014).

POR TANTO,

A S.S.I respetuosamente solicitamos,

Tenerlo presente.

OTROSÍ:

Sírvase este I. Tribunal tener por acompañados los siguientes documentos, con citación:

1. Oficio N°1471 del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 19 de agosto de 2019;
2. Oficio N°1472 del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 19 de agosto de 2019;
3. Documento extraído desde la plataforma electrónica del SEA, del 26 de agosto de 2019 en que el SEA notifica la RCA;
4. Registro de Acta de la Sesión Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana que sesionó el día 5 de agosto de 2019 y que hemos extraído desde la plataforma electrónica del SEA
5. Oficio N° 161.455 de 16 de noviembre de 2016 emitido por el Director Ejecutivo del SEA
6. Acta Completa de la Sesión de la Comisión de Evaluación celebrada el día 5 de agosto de 2019 que hemos extraído desde la plataforma electrónica del SEA

